



1. ¿Qué hacer con el euro? El debate de la izquierda europea

Respuestas y alternativas a la crisis del euro

Alejandro Ramírez

Desde el pasado verano, las clases dirigentes europeas han reaccionado ante la agudización de la "crisis soberana" con una serie de iniciativas de envergadura. El significado fundamental de éstas es que los Estados de la zona euro han aceptado implícitamente (por supuesto no oficialmente) que haga lo que haga Grecia no existe otra alternativa que continuar financiándola con dinero público europeo, porque el propio destino de la moneda única está inexorablemente ligado a la permanencia de Grecia en la zona euro. Es evidente que esta elección no tiene nada que ver con supuestos principios "europeístas" ni con ningún altruismo hacia Grecia, ya que se trata simplemente de garantizar la estabilidad financiera de la zona euro en su conjunto y la propia supervivencia del euro de la que a su vez depende la estabilidad del sistema capitalista europeo.

La aceptación implícita de que los Estados europeos van a tener que prepararse para pagar y hacer lo que haga falta para mantener a Grecia, Irlanda y Portugal a flote, y evitar que caiga nadie más, es lo que les ha llevado a aceptar también la necesidad de hacer "sostenible" la deuda griega. Uno sólo empieza a preocuparse por cómo mejorar la "sostenibilidad" de la deuda griega cuando ha aceptado que su ausencia sólo puede llevar a aumentar la factura para los erarios públicos de los Estados europeos acreedores.

Un plan "voluntario"

Esto es lo que explica que en la declaración de jefes de estado y de gobierno de la zona euro del 21 de Julio estos rompieran con uno de sus principales tabúes. Oficialmente aprobaron una reestructuración de la deuda pública griega con una quita equivalente al 21% de su valor. La quita se realizará a través de un plan "voluntario" de canje de deuda griega en manos de la banca privada en lo que se ha dado en llamar Participación del Sector Privado (PSI en sus siglas en inglés). Se hará con independencia de si las agencias crediticias reac-

cionan declarando a Grecia en situación de impago o no. Es evidente que el famoso PSI se introdujo para hacer políticamente aceptable ante los electores nacionales, principalmente en Alemania, el esfuerzo en gasto público que supondrá mantener a Grecia a flote. Pero una vez aceptada la necesidad de compartir el esfuerzo de las arcas públicas europeas con la banca privada es inevitable que ante cada previsible aumento de las necesidades de financiación de Grecia, causadas por el deterioro progresivo de sus perspectivas de crecimiento, se vuelva a poner sobre la mesa la necesidad de aumentar las quitas de deuda. Esto es precisamente lo que ha sucedido en Octubre ya que, según la prensa, el gobierno alemán está de nuevo presionando para elevar el porcentaje de quita sobre la deuda griega en manos de la banca privada hasta niveles en torno al 40-50%.

En la declaración del 21 de Julio [*sobre los acuerdos de la Cumbre de los días 26 y 27 de octubre, ver <http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/?x=4495>*] los gobiernos de la zona euro también aprobaron un segundo programa de financiación para Grecia, equivalente a 109.000 millones de euros, que a diferencia del primero se llevará a cabo a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). Para mejorar la famosa "sostenibilidad" de la deuda de los tres países bajo programas de ayuda, los tipos de interés de los préstamos del FEEF han sido reducidos hasta niveles entorno al 3,5% (o el nivel de financiación del propio FEEF) y se ha introducido la posibilidad de alargar significativamente (de 7,5 años a 15-30 años) los plazos para devolver los futuros préstamos y las actuales ayudas a Grecia. Otra de las novedades de la declaración del 21 de Julio es que autoriza al FEEF a intervenir en el mercado secundario para realizar compras de deuda pública de la zona euro y así defender su precio cada vez que se desestabilice el mercado. Este es un papel que desde Mayo del 2010 lleva desempeñando el BCE a través de su programa de compras (el SMP), con el que lleva ya acumulados títulos por valor de 163.000 millones de euros. La idea es que el FEEF pueda llegar a reemplazar eventualmente al BCE en esta función. Aunque los analistas son escépticos dada la capacidad limitada del FEEF para financiar sus compras en comparación al BCE. Todo esto evidencia que los Estados europeos se están preparando para tener que pagar y para largo.

Pero si éstos se han comprometido a pagar lo que sea para mantener a Grecia a flote, ésta a su vez va a tener que devolverles el esfuerzo con creces. A cambio de su financiación, Grecia está siendo obligada a aplicar uno de los programas de ajuste neoliberales más ambiciosos de la historia de la humanidad en un tiempo record. Despídos de hasta 100.000 funcionarios públicos de aquí al 2015, privatizaciones por valor de 50.000 millones de euros en cuatro años, recortes de pensiones y de salarios públicos, medidas radicales para "flexibilizar el mercado laboral y deshacer el marco existente de negociación colectiva y liberalización de los sectores profesionales y de los mercados

internos son sólo algunas de las medidas que los "socios" europeos de Grecia pretenden imponerle a ésta.

El problema para los "socios" que financian a Grecia es que ésta sabe tan bien como ellos que, haga lo que haga, el futuro del euro depende de mantenerla a flote. Esto le da una baza negociadora importante a Grecia y explica la continua frustración de sus socios con la "lentitud" con la que ésta aplica muchas de las medidas de ajuste. El drama para la sociedad griega es que está gobernada por un partido "socialdemócrata" ideológicamente convencido de la necesidad de aplicar medidas de ajuste neoliberales y que sólo pretende distribuir las mejor y moderar su aplicación en el tiempo para limitar lo más posible su inevitable descalabro electoral.

Pero a pesar de lo que pueda parecer, los problemas del euro y de la "crisis soberana" ni empiezan ni acaban con Grecia ya que lo único que ha hecho ésta es sacar a relucir problemas mucho más amplios y fundamentales relacionados con los pilares sobre los que se ha construido la propia zona euro. La élite europea por supuesto tiene sus teorías para explicarse qué es lo que ha "andado mal" y ha llevado a la crisis actual de la moneda única. Independientemente de lo certeras que nos parezcan éstas, más vale empezar por conocerlas y comprender de donde vienen. En base a ellas están diseñando su plan de salvamento del euro que incluye el famoso "Pacto por el Euro" o el "Six Pack" de reformas de la gobernanza económica.

Una moneda y diecisiete gobiernos. ¿Un problema de gobernanza?

Jean Claude Trichet, en su última conferencia de prensa como Presidente del BCE el pasado 6 de Octubre, decía que mientras que el Banco Central siempre ha sabido actuar correctamente a lo largo de esta crisis ha sido "*nuestro sistema de gobernanza*" el que no "*ha estado a la altura*" de las circunstancias.

También decía que la propia naturaleza del BCE como institución "supranacional" europea le da a ésta la formidable ventaja de poder gozar de una visión de "conjunto" a la hora de entender los problemas por los que atraviesa la zona euro y de diseñar soluciones.

Según el presidente del BCE ésta es claramente una ventaja de la que no disponen los 17 gobiernos de la zona euro ya que la visión que tienen estos de los problemas del euro, como se ha podido comprobar durante esta crisis, estaba demasiadas veces influida por los "estrechos" intereses nacionales y marcos electorales ante los que estos responden. Según Trichet, el "*deber*" del BCE por lo tanto ha sido siempre el de trasladarle a estos gobiernos la visión de conjunto de la situación.

Todos los problemas fundamentales de la zona euro, de acuerdo a esta visión del mundo, provienen siempre de la tensión que produce la coexistencia de una moneda única gobernada por una única institución supranacional e inde-

pendiente (el BCE) con 17 distintas autoridades fiscales autónomas conformadas por gobiernos nacionales. Éste es un problema que no tienen las otras potencias capitalistas como EE UU, Japón o el Reino Unido donde convive una única autoridad monetaria con la autoridad fiscal de un único gobierno central.

Para superar este problema el sistema de gobernanza del euro se erigió sobre acuerdos intergubernamentales como el famoso Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) cuyo objetivo era limitar, a través de posibles medidas de castigo para los incumplidores, la capacidad de actuación fiscal de los 17 gobiernos que comparten la moneda única.

El problema del PEC, siempre según esta visión, fue precisamente que su carácter intergubernamental permitía a los propios gobiernos que lo habían diseñado cambiarlo e interpretarlo de manera "flexible" cuando a estos les convenía. Cada gobierno entendía que le podría llegar a él el día en el que le vendría también saltarse los límites impuestos por el PEC y por ello le interesaba ser "flexible" también con los otros gobiernos. Esto fue claramente lo que sucedió en noviembre del 2003 cuando los ministros europeos llegaron a un acuerdo dentro de ECOFIN para suspender el proceso sancionador, por infringir los límites de déficit, a Francia y Alemania, las dos principales potencias nacionales del euro de cuya alianza y convergencia de intereses depende la existencia misma de la moneda única. Esta experiencia llevó a la reforma del PEC en el 2005 para hacerlo más flexible y evitar tener que situar de nuevo a las dos grandes potencias europeas en la embarazosa situación de tener que justificar por qué no podían ser sancionadas por infringir las reglas sobre déficit.

El objetivo principal del proyecto de reforma de gobernanza europea y del PEC, el famoso "Six Pack" propuesto por el grupo de trabajo del presidente Van Rompuy, consiste precisamente en limitar todavía más la capacidad de los gobiernos de escaparse de los límites de actuación fiscal impuestos a nivel supranacional. El sueño del BCE hubiese sido diseñar un sistema de sanciones "de aplicación automática", es decir independientes de las negociaciones intergubernamentales coyunturales, para los gobiernos que incumplieran el PEC. El acuerdo final de reforma del PEC, aprobado recientemente por la mayoría conservadora del parlamento europeo, aunque mucho más intervencionista y estricto que el marco anterior, queda todavía lejos de esta utopía neoliberal del BCE.

La indisciplina fiscal como causante de la crisis soberana

Si algo está claro es que las causas fundamentales de la crisis económica por las que atraviesa la zona euro no están relacionadas con la indisciplina fiscal de sus gobiernos sino que ésta forma parte de una crisis global capitalista. Pero es que ni siquiera la mal llamada "crisis soberana" en la que degeneró la crisis financiera de la zona euro a partir del 2010 tiene fundamentalmente que ver con la indisciplina fiscal.

Incluso aceptando que en Grecia existía un problema de ocultación masiva de las cuentas públicas y endeudamiento del sector público causado por un Estado totalmente corrupto, países como Irlanda o España que hoy también se encuentran en el ojo del huracán de la "crisis soberana" eran aupados por los propios neoliberales como ejemplos de rigor y disciplina fiscal antes de la crisis. Ninguno de estos dos países puede ser acusado de irresponsabilidad fiscal con anterioridad a la crisis. En Irlanda fue el rescate de un sector bancario sobredimensionado lo que disparó la deuda pública durante la crisis. En España el deterioro de las cuentas públicas durante la crisis fue causado principalmente por la caída en picado de la recaudación fiscal provocada por la desaceleración económica ligada al pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Italia siempre fue conocida por su enorme carga de deuda pública acumulada y por su bajo crecimiento económico. Pero el estancamiento económico de Italia, que precede a la actual crisis, fue precisamente lo que le ha permitido mantener un déficit fiscal primario (antes de incluir el pago de intereses sobre su deuda) relativamente contenido incluso en los peores momentos de la recesión.

A pesar de las enormes diferencias en el comportamiento fiscal y en la estructura económica de estos distintos países "la crisis soberana" se ha ido extendiendo como un reguero de pólvora desde Grecia a partir del 2010, a Irlanda y después a Portugal y, desde mediados del 2011, a Italia y España. Es precisamente la naturaleza "impredecible" y "contagiosa" de esta crisis financiera y soberana la que ha empujado a las instituciones y gobiernos de la zona euro, a menudo presas del pánico, a adoptar medidas a un ritmo y velocidad impensables antes de la crisis.

Es importante recordar que al inicio de "la crisis soberana" cuando los mercados se cebaban sólo con Grecia corría la ilusión entre las élites europeas de que quizás le vendría hasta bien dejar que Grecia fuese castigada por los mercados por sus "pecados". La idea era que esta presión impulsaría finalmente a Grecia a enderezar sus "irresponsables" políticas fiscales y económicas y serviría de ejemplo de lo que podía sucederle a los otros Estados si se resistían a gestionar sus economías con parámetros neoliberales. El problema vino cuando vieron que los problemas de Grecia eran contagiosos y desestabilizaban a toda la zona euro, no por la importancia minúscula de la economía griega en relación al PIB de la zona euro y ni siquiera por la importancia que pudiese tener la deuda griega en posesión de los bancos europeos, sino por las debilidades sistémicas de la zona euro y que lo que estaba sucediendo en Grecia sacaba a la luz.

¿Quién garantiza el pago de la deuda de los Estados del euro?

Oficialmente aunque la deuda emitida por cada uno de los 17 gobiernos que componen la zona euro está denominada en una misma moneda emitida por un

“Bajo un programa alternativo de izquierdas estas nacionalizaciones se diseñarían con carácter permanente y su objetivo sería poner la oferta de crédito bancario al servicio del interés público en vez del capital privado”

mismo banco central, las garantías de pago de esta deuda no están compartidas sino que dependen de la voluntad y capacidad de pago de 17 autoridades fiscales distintas e independientes. Ninguno de los 17 gobiernos ni siquiera puede ya contar con que su propio banco central monetice sus deudas, aunque quisieran y pudiesen, ya que con la unión monetaria han cedido la autoridad sobre la política monetaria al BCE.

Contrariamente a lo que parecen pensar algunos analistas de izquierda, la capacidad de monetización, en teoría ‘ilimitada’, de la deuda de un gobierno por parte de su banco central

nacional en última instancia tampoco sirve para que el gobierno pueda garantizarse la financiación. *Monetizar* la deuda de un gobierno de manera descontrolada lo único que hace es convertir la desconfianza en la capacidad de pago del gobierno en un problema de credibilidad en la moneda nacional que utiliza ese gobierno para pagar sus deudas. Si una economía depende de la financiación exterior para mantener un déficit por cuenta corriente, la desconfianza en la moneda nacional presionará constantemente el valor cambiario de esta moneda a la baja y podría llegar a obligar al gobierno a tener que emitir su deuda en moneda extranjera para poder atraer a los inversores extranjeros y no tener que pagar tipos de interés elevados. Pero es que, aunque una economía estuviese en situación de autarquía, la emisión sin límite de moneda nacional para financiar la expansión del gasto y de deuda del gobierno provocaría un aumento descontrolado de la inflación que llevaría a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la progresiva sustitución de ésta por moneda extranjera o por simple trueque en las transacciones domésticas. Es precisamente por esta razón por la que en Cuba, por ejemplo, la obligación oficial del banco central de monetizar la deuda del gobierno viene acompañada por leyes que limitan cuánto puede el gobierno gastar en exceso de lo que recauda.

A pesar de que el tratado de la UE dice claramente que ningún gobierno dentro de la unión monetaria puede hacerse responsable de la deuda de otro gobierno dentro de la misma unión, los mercados financieros habían asumido durante años que las garantías de pago sobre la deuda de cada uno de estos gobiernos habían sido de alguna manera “colectivizadas” con el advenimiento del euro. Esta creencia de los mercados se veía reflejada en la persistencia de una prima de riesgo insignificante entre el tipo de interés sobre la deuda de los países del euro y el tipo de interés de la deuda alemana, país tradicionalmente considerado como “bastión” de la disciplina fiscal.

Al fin y al cabo a nivel agregado el déficit fiscal y el nivel de deuda pública de la zona euro en su conjunto (-6% y 85% del PIB) se hallan o muy por debajo,

en el caso del déficit, o en línea, en el de la deuda, con el de las otras tres principales potencias capitalistas, EE UU (-11% y 78% del PIB), Japon (-9% y 108% del PIB) y el Reino Unido (-10% y 80% del PIB). Además, casi la mitad de esta deuda pública está compuesta de deuda AAA alemana y francesa que a plazos de diez años se financia a tipos entorno al 2-3%. Por lo tanto, en teoría, si el conjunto de los países de la zona euro garantizaran las deudas de los países periféricos, esto debería de ser asumible para el conjunto de la zona euro.

Fue precisamente la asunción por parte de los mercados de que podía no existir voluntad política por parte de las élites europeas de "colectivizar" las garantías de pago de los distintos gobiernos nacionales del euro lo que crea el famoso efecto "contagio". Esto es también lo que explica porque han sido precisamente medidas como los préstamos del FEEF, con garantías del resto de los gobiernos de la zona euro, a Irlanda y Portugal y los créditos de la UE a Grecia los que han servido para calmar temporalmente a los mercados.

¿Pero estaban realmente tan equivocados los mercados en haber asumido que las deudas de los países miembros del euro acabarían siendo "colectivizadas" si algún día llegase a haber problemas? ¿Al fin y al cabo no es precisamente en esa dirección en la que se encaminan los estados del euro con la creación del FEEF y las continuas reformas de sus estatutos?

La incertidumbre permanente sobre hasta dónde están dispuestos a llegar los estados del euro para "colectivizar" la deuda y así garantizar la estabilidad financiera del euro es la causante de que el efecto "contagio" retorne periódicamente como un tsunami y amaine sólo temporalmente con cada nueva iniciativa "garantista" que se toma a nivel europeo.

La calma ha sido siempre temporal precisamente porque las garantías de pago y apoyo siempre se concedían de manera limitada y titubeante y su continuidad siempre quedaba en entredicho. ¿Cómo iba el mercado a confiar en su continuidad si estos créditos siempre se concedían a condición de que el país receptor profundizase las medidas de ajuste neoliberal dictadas por la Troika compuesta por el FMI el BCE y la Comisión Europea? ¿Cómo iba nadie a confiar en su continuidad si cada mes se amenazaba a Grecia con cortar los préstamos si no aplicaba los ajustes X o Y o cuando se hablaba de una quita cada vez mayor de deuda griega para reducir el monto de crédito que necesitarían aportar los gobiernos europeos?

La quita de deuda pública como solución

Contrariamente a lo que se suele pensar, los principales afectados por una quita de deuda griega no serían los bancos franceses o los alemanes, sino los propios bancos griegos. Aunque un 60% de la deuda pública griega se halla en manos extranjeras, la deuda griega en los balances de los bancos y fondos no-griegos representa una cantidad relativamente pequeña en relación a su cartera global de activos. Entre los bancos extranjeros (como Dexia, BNP, Societe

General, Commerzbank, Deutsche Bank) que son los mayores tenedores de deuda griega, en ningún caso esta deuda llega a representar ni tan siquiera el 1% de sus balances. Las pérdidas ocasionadas por una quita griega sin duda reducirían sus beneficios, ya que estas entidades tendrían que realizar provisiones para cubrir las pérdidas. En el peor de los casos, sus Estados acabarían teniendo que contribuir a recapitalizarlas con fondos públicos. En cambio, el peso que tiene la deuda griega en manos de los bancos griegos, en relación a la cartera global de éstos es enormemente más importante (representa entre un 10-13% de sus balances) y una quita llevaría a la mayor parte de éstos a la bancarrota a menos que el Estado griego los recapitalizase. ¿De dónde iba a sacar el gobierno griego estos fondos públicos? Precisamente de los préstamos concedidos por la UE y el FMI.

Por ello, no es tanto la quita sobre la deuda griega lo que representa un riesgo sistémico para el sistema financiero europeo, más allá de la banca griega, sino la posibilidad de que esta quita sienta un precedente y lleve al mercado a descontar posibles quitas sobre otros mercados de títulos de deuda mucho más importantes, como son el mercado de deuda italiano o el español. Las pérdidas ocasionadas por quitas sobre la deuda italiana y española tendrían un efecto devastador sobre la banca francesa y, en menor medida, también en la alemana.

Una recapitalización significativa con fondos públicos de la banca europea provocada por las pérdidas ocasionadas por quitas de deuda pública europea en la práctica conduciría a la nacionalización de numerosas entidades bancarias. Estas nacionalizaciones no saldrían gratis, como a veces parecen pensar ciertos sectores de la izquierda, sino que correrían a costa del erario público. Desde el inicio de la crisis financiera ya se han nacionalizado gran cantidad de bancos en Europa, pero estas nacionalizaciones siempre han estado diseñadas como medidas temporales cuyo objetivo era siempre facilitar la reestructuración y el saneamiento de las entidades intervenidas para facilitar su posterior privatización. Bajo un programa alternativo de izquierdas estas nacionalizaciones se diseñarían con carácter permanente y su objetivo sería poner la oferta de crédito bancario al servicio del interés público en vez del capital privado. Está claro que el control efectivo democrático de la ciudadanía sobre la gobernanza de estas entidades sería fundamental para evitar que redes de intereses privados y políticos acabasen por hacerse con su control, como ha sucedido con las cajas de ahorro en España.

¿Cuáles son las alternativas?

Está claro que tanto con quitas o sin quitas de deuda, como con nacionalizaciones de bancos insolventes, los costes de asegurar la financiación de la deuda pública en la periferia europea se van a tener que sufragar con gasto público. Lo importante para un programa de izquierdas está en determinar en beneficio de quién se va a realizar este esfuerzo. Un programa de izquierdas también

buscaría garantizar de manera colectiva la deuda de los países de la periferia, pero no lo haría a cambio de condiciones de ajuste neoliberal o de reformas liberalizadoras o de la flexibilización del mercado laboral como lo están haciendo los programas de la Troika.

Bajo el esquema actual, los Estados de la zona euro están sufragando a través de créditos los gastos de países como Irlanda, Portugal y Grecia para asegurar que éstos puedan continuar pagando sus deudas y evitar el contagio al resto de la zona euro.

Salir del euro, como proponen algunos sectores de izquierda para Grecia, es proponer un remedio peor que la enfermedad. Grecia depende de la financiación exterior para pagar un déficit por cuenta corriente equivalente al 10-11% de su PIB y para financiar su déficit fiscal. Aunque abandonara el euro y adoptara su propia moneda, incluso si renegara de toda su deuda (equivalente al 143% de su PIB), tendría todavía que financiar estos dos déficits. Esto sería así, a menos que estuviese dispuesta a reducir el gasto interno de manera brutal en un plazo de tiempo muy reducido para reequilibrar su balanza de pagos y cuenta fiscal, algo difícilmente defendible desde un programa de izquierdas. Aumentar la recaudación fiscal a través de un sistema impositivo más justo que gravase las rentas más altas y el impuesto de sociedades (en lugar de centrarse como la Troika en aumentar el IVA y en hacerle pagar el IRPF a segmentos de rentas cada vez más bajos) sería sin duda una medida justa y necesaria pero difícilmente sería suficiente para cerrar una diferencia entre gasto y recaudación fiscal equivalente a más de diez puntos porcentuales del PIB.

Las condiciones de mercado a las que Grecia tendría que hacer frente para obtener financiación exterior serían mucho más complicadas si ésta adoptase de nuevo su propia moneda ya que los mercados le exigirían tipos de interés mucho más elevados para compensarles por el riesgo de devaluación de su moneda y el riesgo de impago. Estos intereses con toda seguridad serían mucho más elevados que el 3,5% al que la UE y el FMI se han comprometido a concederle su línea de crédito. Irónicamente aunque Grecia adoptara su propia moneda, podría verse obligada a emitir su deuda en euros de nuevo como única forma de poder acceder a los mercados internacionales.

Hay sectores que piensan que una devaluación brutal de la nueva moneda griega evitaría precisamente la necesidad de realizar el ajuste competitivo a través de reducciones de salarios y precios internos. Según esta visión una devaluación de la moneda griega automáticamente haría más competitiva a Grecia y por arte de magia haría crecer las exportaciones lo suficiente como para reequilibrar el enorme déficit por cuenta corriente del país. El aumento "milagroso" de la demanda exterior para exportaciones griegas por sí solo sería capaz de evitar la necesidad de disminuir el gasto interno y de reducir salarios y precios.

Se basan para ello en el ejemplo de Argentina. Pero Argentina se benefició de un sector exportador dominado por el petróleo, mercancías agrícolas alta-

mente globalizadas (como los cereales, la soja y la carne) y las materias primas. Sectores que se beneficiaron de un *boom* internacional de sus precios al poco tiempo de la crisis argentina. Grecia no dispone de nada comparable y si sus exportaciones no fueron capaces ni siquiera de recuperarse cuando la recuperación del comercio internacional tiraba del crecimiento de las exportaciones de los demás países europeos, difícilmente lo podría conseguir ahora.

Lo peor de esta visión de algunos sectores de izquierda es que parece aceptar indirectamente el dogma liberal de que los niveles salariales de los griegos son realmente un problema y que han contribuido a la pérdida de competitividad externa del país. Aunque la solución que proponen para recuperar la sacrosanta competitividad se basa en la devaluación de la moneda y no el ajuste salarial la premisa de la que parten es la misma que la de los analistas neoliberales.

Contrariamente a las predicciones apocalípticas de turno, argumentadas a menudo de manera idéntica tanto por sectores de derechas como de izquierdas, la zona euro no se desintegrará. Hay demasiado en juego para la élite europea como para permitir que esto pase. A fin de cuentas la supervivencia del euro es una cuestión de voluntad política, principalmente de las clases dirigentes alemanas y francesas, no un problema económico.

El camino que va a tomar el proyecto del euro para salir de la crisis soberana no es tampoco ningún misterio. Tanto las presiones de la situación económica-financiera como la propia lógica de la evolución de los acontecimientos empujan irremediabilmente hacia un proceso progresivo de "colectivización" de la deuda de los Estados del euro y hacia una mayor integración de sus políticas económicas, fiscales y financieras. Para que esto sea políticamente aceptable dentro de Estados, como Alemania, a cuyo cargo correrán la mayor parte de los gastos, se aceptarán quitas de deuda y otras "concesiones" en aquellos países donde de lo contrario sería imposible garantizar la sostenibilidad de la deuda. A cambio de esto los demás Estados del euro se verán obligados a ceder cada vez más autonomía en el diseño de sus políticas fiscales y económicas en favor de un modelo de gestión neoliberal cada vez más homogéneo.

Las principales incógnitas en torno a este proceso se refieren al ritmo y los tiempos que va a tomar y no en su dirección. Por supuesto que nada en la historia es inevitable. Pero para evitar que las clases dirigentes europeas aprovechen el momento histórico y avancen en el proceso de integración europea para construir su paraíso neoliberal, es imprescindible que la izquierda tome pronto conciencia de la situación, deje de lado las perspectivas apocalípticas que preven la disolución del euro, y contraponga un modelo alternativo de integración europea basado en los intereses de los trabajadores.

Alejandro Ramírez es economista.